

Los juegos de la guerra

Ricardo Soberón

El debate entre los que presentan los hechos ocurridos en Somavireni (Satipo) como un rebrote de la subversión y aquellos que desde el gobierno del presidente Toledo sugieren que se trata de la misma situación focalizada que viene ocurriendo desde hace tres a cuatro años, no hace sino expresar intereses y percepciones diferentes. Aunque en otro contexto, me hace recordar el tremendo error cometido en 1982 por el entonces presidente Belaunde, cuando tildó a los senderistas de abigeos. La gran virtud de una política eficaz de seguridad y orden interno radica en no dejarse llevar ni por la subestimación ni por la exageración. Ciertamente, durante el Operativo Tormenta se han producido lamentables pérdidas de cuatro policías, pero aun así, debemos tener cuidado en filtrar los hechos reales de las meras virtualidades.

Persisten sectores al interior de las Fuerzas Armadas (¿rezagos montesinistas?) a los que les interesa presentar los hechos como un reflejo de la permanente amenaza de SL. Por tanto, requieren justificar ante la opinión pública nacional su permanencia en las zonas que anteriormente se encontraban en emergencia. Durante la época anterior, los destinos en dichas zonas eran bien recibidos, con mayor razón cuando éstos confluían en zonas en las que el narcotráfico actuaba. En este juego peligroso de levantar muertos, participan algunos medios de comunicación de raíz montesinista. Este episodio demuestra que las instituciones castrenses y policiales deberán acostumbrarse progresivamente a tener dos ministros civiles, quienes toman las decisiones en el campo de la seguridad y el orden interno. El reacomodo no es fácil y los obstáculos pueden ser diversos: granadas, atentados, asonadas, motines, etcétera.

Vale la pena recordar, por un momento, en qué situación encuentra este "rebrote" a las Fuerzas Armadas y PNP peruanas. Ellas se encuentran en franco proceso de cambios institucionales frente a los hechos ocurridos en la última década, lo cual es bueno. Sufren las consecuencias de severos recortes presupuestales, del mayor control civil (ministerios y Contraloría) y de una disminución de los reclutas debido al sistema de servicio militar voluntario. En la práctica, en el futuro cada una de ellas deberá justificar su tamaño, presupuestos y misiones.

No se debe olvidar el uso que Fujimori le dio al tema de la lucha antisubversiva: primero, acreditarse capturas importantes como parte de los operativos psicosociales y de su calendario político. Luego, manejar las rendiciones y los Acuerdos de Paz con los que se encontraban al interior del sistema penitenciario, hasta que ocurrió el affaire del general EP Fournier en 1999, en la misma zona selvática. Incluso en los últimos meses de Fujimori, se dio un proceso de repliegue de las bases antisubversivas que continuó durante el gobierno de transición, dejando mayor campo de acción a esas columnas asentadas en verdaderos "santuarios". Esas malas prácticas pueden ser difíciles de desterrar dentro de estructuras jerárquicas.

En el marco de estos juegos bélicos, persisten sectores sociales que se benefician del mantenimiento de un estado de militarización latente, incluso dentro de la sociedad civil. Es el caso de algunos sectores al interior de los Comités de Autodefensa (CAD) que se reflejan en sus pedidos para mantener las armas, reinstaurar el estado de emergencia, su organización cuasi militar, la necesidad de vigilar, el denominativo de "comandos", entre otros. Es cierto que con estas asonadas, es necesario mantener temporalmente el sistema de seguridad interna representado por la red de estas valiosas organizaciones de la comunidad, pero ésta no es una situación que puede

persistir indefinidamente. Los CAD no van a reemplazar a la Policía, ni a los jueces, ni a las autoridades políticas en sus comunidades. Apoyarlas, sí; sustituirlas es muy difícil.

Sobre la convivencia de SL con el narcotráfico, ésta es una situación que nunca fue asertivamente afrontada desde el Estado. Es cierto que en los años ochenta y en los noventa, dineros del narcotráfico fueron a parar a las arcas de los Comités Regionales de SL respectivos, como ocurrió por ejemplo en el caso del impuesto que pagaban los "narcos" por cada embarque en zonas controladas por ellos. Pero no del mismo modo que sucede en Colombia, con el impuesto que pagan los hacendados de la coca a las FARC por tener grandes cultivos de coca (Putumayo, Caquetá). Lo cierto es que la experiencia en el mundo indica que ninguno de los actores políticos que se involucran en escenarios de narcotráfico logran evitar su influencia económica. Los "señores de la guerra" buscan el control territorial, pero también el dinero fácil. La selva central, como otros lugares de la selva alta peruana, es un espacio territorial extremadamente complejo y conflictivo. La convergencia de traficantes, senderistas, delincuentes, y del otro lado madereros, migrantes, nativos, policías y Ejército determinan un tablero muy volátil.

Pero calificar a SL y el narcotráfico en el Perú como un solo fenómeno –y peor aún, producir políticas generales para ambos– constituye un gran error por parte del Estado. Ni se elimina el tráfico ilegal, ni se reducen las causas que provocan la subversión. Más acertado pudiera ser identificar la causa común de la persistencia de estos remanentes de SL, precisamente en dichos valles: el descontento social frente a la pobreza y la represión. La situación es tan difusa, que no podemos identificar un solo movimiento, sino más bien diversas facciones pequeñas en función al Acuerdo de Paz y su futuro.

¿En qué situación real podemos encontrar a lo que queda de Sendero Rojo? A decir de las autoridades, tenemos tres espacios con presencia senderista, claramente determinados, cada columna de un tamaño aproximado a los 120 hombres: (i) Alto Huallaga (Monzón, Aucayacu, Aguaytía), (ii) Vizcatán (Ayacucho), y (iii) la orilla izquierda del Ene (Junín, Pasco). Curiosamente, se trata de zonas cocaleras en las que el problema pasa por la debilidad de los esquemas de desarrollo rural y las frecuentes disputas con la población campesina. Además, debemos considerar que se trata de escenarios en los que pobreza, marginación, exclusión y represión se conjugan para configurar en SL un nuevo actor: políticamente débil, militarmente focalizado en áreas geográficamente muy difíciles de ser combatidas. Como me decía un mayor del Ejército: "20 policías en la selva valen por 8; 20 soldados valen por 14 y 5 subversivos valen por 15...". Además, debemos considerar tres nuevos elementos característicos de estos remanentes: capacidad de acción reducida a operaciones militares muy puntuales pero efectivas en términos de opinión pública; con capacidad de entrar en negociaciones con firmas de traficantes locales que se intentan reagrupar luego del fin del monopolio de Montesinos en el narcotráfico. Luego, este nuevo actor cambia de discurso ideológico por un discurso más pragmático: apoyo a organizaciones y autoridades existentes, menos dogmático, más encubierto. Finalmente, lo que quiero decir es que estamos frente a una nueva situación en la que se requiere actuar con prontitud, firmeza y coherencia entre todos los sectores estatales y no estatales.

Ricardo Soberón es abogado, analista en asuntos de seguridad